



LAS CÁRCELES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ANTE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19

Elaborado por:
**Nathalie Alvarado, Karelía Villa Mar,
María José Jarquín, Bárbara Cedillo
y Daniela Forero**



Copyright © 2020 Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Nótese que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577
www.iadb.org



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PREVENIR Y CONTENER LA PANDEMIA EN LAS CÁRCELES?

América Latina y el Caribe (ALC) tiene un millón y medio de reclusos y una tasa de encarcelamiento que se ha duplicado desde el año 2000: **ha aumentado un 120%** frente a un tímido 24% en el resto del mundo. Estos datos son fruto de un sistema de justicia que, en líneas generales, opta por el encarcelamiento como principal medida punitiva en lugar de explorar otras opciones como la libertad vigilada, los servicios comunitarios o las penas económicas. Todo esto se une al enorme volumen de personas privadas de libertad en prisión preventiva que se encuentran a la espera de un juicio.

La región casi duplica la tasa de encarcelamiento de la media mundial de presos. En ALC hay **262 reclusos por cada 100.000** habitantes, mientras que en África y Asia esta cifra es de 97; en Europa, de 187; en Oceanía, de 157, y la media mundial es de 145¹. El promedio de sobrepoblación en las cárceles de ALC es del 64%, pero hay casos alarmantes como el de Haití, donde alcanza el 354%, o El Salvador y Guatemala, países en los que llega al 233%.

Las grandes aglomeraciones de presos unidas a la precariedad y a la falta de recursos dentro de los centros penitenciarios afectan directamente a la salud de los internos. Una encuesta realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a reclusos en 14 países de la región visibilizó que, en promedio, en las celdas viven un 45% más de personas de las que deberían y que el 58% de los encuestados no duerme en una cama (<https://publications.iadb.org/es/dentro-de-las-prisiones-de-america-latina-y-el-caribe-una-primera-mirada-al-otro-lado-de-las-rejas>).

Las enfermedades infecciosas tienen una prevalencia mayor dentro de los centros penitenciarios de todo el mundo. La tasa de tuberculosis es 81 veces superior incluso en los mejores casos y los resultados son semejantes al analizar la incidencia del VIH, la hepatitis o la sífilis. Un ejemplo: en Brasil, el nivel de VIH dentro de las cárceles es 138 veces superior que fuera de ellas.

Un brote en las cárceles de ALC de una enfermedad altamente contagiosa como el COVID-19 generaría un enorme problema de salud pública que afectaría a los reclusos, a los familiares que les visitan y al personal de los centros penitenciarios. Todo esto con un agravante: del millón y medio de reclusos de la región, un 6% son mayores de 65 años: el grupo de edad más vulnerable a este virus.

Las autoridades sanitarias apuntan al lavado de manos y la desinfección de espacios como las dos principales herramientas para prevenir y luchar contra la propagación del virus, pero su aplicación en las cárceles no siempre es posible. El 20% de los reclusos no tiene acceso suficiente a agua potable, solo el 37% cuenta con jabón y el 29% de la población penitenciaria no recibe atención médica.

¹ *World Prison Brief*, 2018. https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/wppl_12.pdf



45%

**MÁS DE PERSONAS VIVEN
EN LAS CELDAS DE LAS
QUE DEBERÍAN**



58%

**DE LOS ENCUESTADOS NO
DUERME EN UNA CAMA**



64%

**PROMEDIO DE SOBREPoblACIÓN
EN LAS CÁRCELES**

El distanciamiento social necesario para combatir el COVID-19 implica reducir las visitas de personal externo a los centros penitenciarios, lo que supone un estrés adicional para los reclusos. Esta situación puede ocasionar graves tensiones tanto entre los presos como en su entorno. Primero, por la lógica necesidad de ambas partes de saber que sus familiares están sanos y seguros, algo que en gran parte de las cárceles de la región es un desafío presente por la falta de mecanismos de comunicación inmediata de los internos con el exterior. Segundo, porque los familiares y allegados son los que, en muchas ocasiones, facilitan a los internos bienes de primera necesidad que la prisión no les proporciona, como el jabón o la ropa.

Los intentos de fuga, las revueltas en los centros penitenciarios y las protestas por parte del entorno serán unos de los focos que habrá que tener en cuenta. De hecho, a raíz de las primeras medidas de prevención y mitigación del contagio del coronavirus en la región se han registrado altercados en algunos centros penitenciarios de varios países.

Sin embargo, esta crisis puede ser también una oportunidad para replantear la gestión del sistema penitenciario de ALC y establecer las bases para un nuevo camino.

En respuesta a este apremiante desafío para la región, el BID celebró el 3 de abril el Diálogo Regional Virtual **“¿Cómo atender los desafíos en el sistema penitenciario en el contexto de una crisis de salud pública?: Compartiendo experiencias y aprendizajes en ALC y el mundo para la gestión de la pandemia del COVID-19”** (www.iadb.org/EventoPrisionesCOVID19). El objetivo era presentar algunos de los lineamientos implementados en la región y en el plano internacional para prevenir y mitigar de una manera integral todos los riesgos de la pandemia para los penales, e intercambiar ideas y conocimiento con los ministros/viceministros/directores a cargo de los sistemas penitenciarios en ALC.

El BID realizó el Diálogo Regional Virtual en colaboración con socios estratégicos encargados de apoyar la gestión penitenciaria a nivel internacional como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Asociación Internacional de Prisiones (ICPA), la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y el centro de estudios sobre Sistemas Penitenciarios Innovadores (IPS). En total, participaron más de 15 países de ALC, representados por autoridades y altos funcionarios responsables de la política y la gestión penitenciaria.



2

LAS PRINCIPALES EXPERIENCIAS DE PAÍS Y LAS CONSIDERACIONES DESTACADAS EN EL DIÁLOGO REGIONAL VIRTUAL FUERON: MEDIDAS PARA EVITAR LOS CONTAGIOS

Los países de ALC han puesto en marcha diferentes acciones desde el principio de la crisis sanitaria del coronavirus para prevenir brotes y reducir la tensión social en las prisiones. Las tres principales líneas de acción reportadas son: i) aumentar las medidas de higiene y atención médica, ii) procurar el distanciamiento social y iii) reducir al mínimo el contacto con el exterior. Si bien las medidas están claras, se identifican retos a la hora de poder llevarlas a la práctica.



Incremento de las medidas de higiene y atención médica.

I. Suministros. La falta de visitas de familiares y abogados merma la calidad de vida de los reclusos porque muchas veces son ellos los que les suministran bienes necesarios para el día a día. Las autoridades estatales, regionales o locales deben asumir responsabilidades y proveer a los internos de estos suministros tales como productos de higiene, alimentos extra, ropa o medicamentos.

II. Desinfección. Los centros penitenciarios han puesto en marcha programas de limpieza y desinfección, en algunos casos aplicados por los propios internos. También han instalado bombas de agua, que son un bien escaso en muchos penales.

III. Pruebas y otras medidas de detección. Las pruebas para diagnosticar el COVID-19 escasean dentro y fuera de las prisiones, pero, en la medida de lo posible, es aconsejable que los centros penitenciarios tengan cierto aprovisionamiento. También es importante establecer controles sanitarios periódicos entre los trabajadores de las cárceles. Jamaica fue uno de los países pioneros en establecer pruebas de detección temprana en sus penales.



Distanciamiento social.

I. Descongestión de centros. Gobiernos de todo el mundo han emprendido acciones para aliviar la presión de los centros penitenciarios. España, por ejemplo, ordenó al principio de la crisis la libertad vigilada de cientos de presos y vació los centros de internamiento para extranjeros. Chile ha implementado una Ley de Indulto ([Ley 21.228](#)) que beneficia a 1.300 encarcelados especialmente vulnerables: aquellos con patologías previas como hipertensión o diabetes, los de edad avanzada y las madres de hijos pequeños. Colombia, con 120.000 privados de libertad, implementó el [Decreto de Ley 546](#) para conceder medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en cárceles por la prisión domiciliaria a aproximadamente 50.000 personas privadas de libertad que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19. México ha iniciado los trámites para una [Ley de Amnistía](#) que prevé la excarcelación de 10.000 reclusos. [Varios estados de Brasil](#) también han comenzado a cambiar el régimen de presos a arresto domiciliario, la misma

medida que han aplicado algunos penales argentinos para condenados por delitos menores que presenten riesgo sanitario.

II. Habilitación de zonas especiales. Cuando sea posible, deben habilitarse zonas preparadas para acoger a los presos más vulnerables y para atender a los que muestren síntomas. Sería conveniente que allí hubiera equipos de cuidados intensivos para evitar el mayor número posible de traslados. En Perú, por ejemplo, han creado este tipo de zonas en 59 penales.



Reducir el contacto con el exterior.

I. Restricción de visitas. Los países comenzaron reduciendo las visitas del exterior a los penales para evitar contagios, pero pronto las restringieron por completo. Familiares, abogados, pedagogos y trabajadores sociales quedan fuera de los muros de la prisión para evitar la entrada del virus. La barrera al contacto físico no puede suponer, no obstante, el completo aislamiento de los reclusos, por lo que se utilizan herramientas para facilitar el contacto virtual. La más común es la videollamada, que no siempre es posible por la falta de medios técnicos o de espacios en las cárceles para habilitar este servicio de forma urgente. Todas y cada una de estas decisiones deben tomarse con total transparencia y la información, tanto a los familiares como a los reclusos, tiene que ser constante para evitar más tensiones en un momento particularmente complicado.

II. Limitación de entradas. Los gestores de las cárceles reclaman limitar o suspender durante un tiempo la entrada de nuevos reclusos. Un dato para tener en cuenta es que casi la mitad de los presos en ALC están en prisión preventiva, es decir, aún no tienen una condena en firme.

Los países han identificado otras medidas importantes y transversales para atender la crisis sanitaria del COVID-19 en el sistema penitenciario en las líneas de acción identificadas.

III. Pedagogía. Para evitar que la salida de reclusos de las prisiones provoque alarma social, hay que informar a los ciudadanos que estas medidas alternativas no son un acto de impunidad, sino de humanidad. Es necesario comunicar que solo tendrán libertad temporal los presos que no representen una amenaza pública y que cumplan con ciertos criterios.

IV. Fabricación de útiles. Las personas privadas de libertad pueden contribuir a su propia protección y a la de la población en general durante esta crisis de salud pública. En numerosos centros penitenciarios de países como Chile, Ecuador o Perú, el tiempo antes dedicado a las visitas o a los talleres de ocio se ha ocupado con la fabricación de productos de protección. Cientos de presos hacen mascarillas, jabones o batas en el interior de las prisiones.

V. Protocolos claros. Los funcionarios de prisiones y los médicos que trabajan en los centros penitenciarios reclaman a las autoridades protocolos de acción concretos para enfrentar la emergencia sanitaria por el COVID-19. ¿Qué hay que hacer si los doctores detectan un caso positivo en la cárcel? ¿A quién hay que informar cuando se produzca un contagio? ¿Hay previstos sustitutos si los médicos penitenciarios enferman? También es importante establecer rotaciones entre los trabajadores de las prisiones. Algunos profesionales sugieren que quienes estén destinados en el área de enfermería no ocupen otros puestos durante los próximos meses para reducir la probabilidad de contagios. Los expertos en sistemas penitenciarios exigen que se expliquen bien todos los procesos a los empleados de las cárceles para saber cómo actuar en cualquier situación.

VI. Diferentes rutinas. La supresión de visitas y de actividades de ocio y de formación deja un vacío para los reclusos. El fomento de actividades deportivas sin contacto físico es una de las alternativas posibles. Es recomendable hacer turnos en las horas en las que los internos pueden disfrutar del aire libre en el patio para evitar aglomeraciones.

A large, bold white number '3' is centered on a dark, grayscale background. To the left of the number is a solid red vertical bar. The background shows a blurred interior scene with people sitting on the floor, possibly in a library or study area, with bookshelves visible in the background.

3

EL PUNTO DE VISTA HUMANITARIO EN ESTA CRISIS SANITARIA

Esta pandemia puede ser una oportunidad para humanizar el sistema penal de la región, una reclamación histórica, y poner el foco en los derechos fundamentales de los presos, como el acceso a la salud, algo que ahora cobra más importancia que nunca. Con la sobrepoblación e insalubridad que existe en los penales de ALC resulta casi imposible llevar a cabo las acciones sanitarias, de prevención y reducción de tensiones existentes, pero sí es posible avanzar en la discusión y el desarrollo de medidas alternativas a la prisión.

Existe un amplio consenso sobre la necesidad de trabajar en vías alternativas a la privación de libertad que trasciendan la crisis del coronavirus. Países como República Dominicana han buscado el acuerdo entre el Poder Judicial y el sistema penitenciario para promocionar la aplicación de penas que no impliquen el encarcelamiento (pago de multas, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, entre otras).

La mayoría de los países del mundo han puesto en marcha planes de descongestión de los penales para resolver la crisis inmediata y lo aprendido podría convertirse en una política de Estado. Un buen ejemplo han sido los esfuerzos para identificar a presos vulnerables -con enfermedades terminales y crónicas o ancianos- con el objeto de brindarles una atención especial dentro de las cárceles o para concederles la libertad vigilada o la prisión domiciliaria. Este tipo de esfuerzos requiere el establecimiento de parámetros alrededor de elementos como la edad, las precondiciones de salud, el tipo de delito cometido, la condición de embarazo en el caso de mujeres o en qué punto del cumplimiento de la pena se encuentra el recluso, entre otros.

Los dispositivos electrónicos resultan muy útiles para contener la sobrepoblación en los centros penitenciarios. Las tobilleras o las aplicaciones móviles sirven como mecanismos eficientes de supervisión, especialmente en el caso de los presos menos peligrosos que no suponen una amenaza para la sociedad. Su aplicación, sin embargo, requiere la disponibilidad de recursos financieros y humanos que no siempre están disponibles.

Numerosos gobiernos se han fijado como objetivo monitorear el avance y la implementación de todas estas acciones con el fin de comprobar su efectividad y detectar posibles fallos. Esto puede suponer un ejercicio interesante para generar después políticas duraderas basadas en la evidencia de experiencias como la crisis del coronavirus.



4



EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA Y LAS SOLUCIONES INNOVADORAS

La creatividad y la innovación son claves para abordar una emergencia única como la pandemia del coronavirus, que demanda nuevas soluciones y estresa los limitados recursos disponibles. La tecnología es fundamental y puede facilitar estos procesos.



Videollamadas.

Las videollamadas permiten suplir las visitas canceladas como consecuencia de la pandemia y que los presos tengan contacto con sus familiares, abogados, representantes consulares, doctores o trabajadores sociales. Esta herramienta facilita también que el sistema judicial no quede en suspenso y se puedan celebrar las audiencias con todas las garantías procesales.

Cuando la falta de medios impide hacer videollamadas, algunos países del mundo han adoptado otras soluciones para llegar a un acuerdo con los reclusos. Por ejemplo, darles más minutos para que hablen por teléfono y, si necesitan dinero para realizar las llamadas, habilitar líneas gratuitas o facilitar tarjetas prepago.



Espacios para las teleconferencias.

Las restricciones de comunicación con el exterior que existen en las prisiones se vuelven extremas en situaciones de crisis sanitaria. Hay problemas para disponer de una conexión a Internet que soporte el incremento de volumen de uso requerido. Por eso, ofrecer alternativas de conexión digital facilitaría el contacto virtual y disminuiría la tensión que genera la falta de información y comunicación con el exterior.



Telemedicina y teleeducación.

Cualquier dolencia que no sea de gravedad o no esté relacionada directamente con el coronavirus podría ser tratada en una videoconferencia. Lo mismo ocurre con las consultas de salud mental, ya que las situaciones de estrés afectan especialmente a los pacientes con esas patologías. Países como Costa Rica ya habían puesto este sistema en práctica antes de la pandemia. En cuanto a las actividades formativas, es esencial que los reclusos continúen haciéndolas a través de plataformas de teleeducación. El objetivo es que las prisiones se sigan concibiendo como lugares de rehabilitación.



Vigilancia de forma remota.

La libertad vigilada es una alternativa para descongestionar los centros penitenciarios y la tecnología, una aliada para controlar a los presos a los que se concede este régimen. Los brazaletes electrónicos son la opción más segura, pero no todos los condenados necesitan este método. En algunos casos, como

por ejemplo los que no presentan riesgo de fuga, basta con una aplicación móvil o incluso una videollamada para comprobar que cumplen las condiciones.

Existen opciones interesantes para subsanar la precariedad tecnológica del sistema penitenciario y autogestionar de manera efectiva las tecnologías que permitan acceder a soluciones innovadoras:



Software libre.

El software libre es una herramienta muy útil cuando se requieren acciones rápidas y los recursos escasean. Hay muchas soluciones digitales gratuitas y algunas empresas están poniendo a disposición de los usuarios servicios sin coste mientras dure esta coyuntura. Las soluciones de firma digital también son un gran aliado y se pueden utilizar, por ejemplo, en las notificaciones judiciales.



Implantar un sistema urgente.

La burocracia y la escasez de recursos financieros pueden representar una barrera a la hora de adquirir material y preparar los equipos para las videollamadas. Una opción es aprovechar todo el material electrónico que estuviera a punto de ser descartado por organismos públicos u otras entidades que quieran donarlo. Un equipo especializado deberá preparar las computadoras para las llamadas a familiares, al médico, al trabajador social o al abogado, entre otros.

5

...en la ...

...me ...
...en ...
...cada ...
...de ...

El ...
...una ...
...que ...
...que ...
...que ...

...en ...
...de ...
...de ...
...de ...

...en ...
...de ...
...de ...
...de ...

LA NECESARIA COOPERACIÓN ENTRE PAÍSES E INSTITUCIONES ANTE UNA AMENAZA GLOBAL

La crisis derivada del COVID-19 está evidenciando muchas de las carencias que el sistema penitenciario de ALC sufre como consecuencia de décadas de abandono, pero también abre una posibilidad para poner fin a problemas estructurales.

Ahora más que nunca, resulta esencial la comunicación entre países e instituciones para poner de relieve las medidas que funcionan y las que hay que corregir. Los encuentros digitales para el intercambio de experiencias son un buen mecanismo para mejorar las acciones adoptadas en tiempo real. Esto es válido no solo entre los países de la región, sino también para ver las medidas adoptadas en otros lugares, como Europa, donde la crisis impactó antes. Esta pandemia no entiende de fronteras y son necesarias alianzas transnacionales para abordarla y superarla.

En este contexto se enmarca el programa de la Unión Europea [EL PAcCTO](#), destinado a promover la seguridad ciudadana en América Latina y a combatir el crimen organizado. Este programa ha activado un canal específico de comunicación entre ambos continentes para intercambiar información sobre la emergencia sanitaria en el ámbito de las fuerzas de seguridad, las instituciones de justicia y las prisiones. De este modo, existe una vía directa para aprender casi al momento de los aciertos y errores.

Este canal de comunicación integra a 17 países de ALC más España, Francia, Italia y Portugal y constituye una de las primeras iniciativas destinadas exclusivamente a favorecer la coordinación y cooperación entre ambas regiones en la lucha contra el coronavirus.

También existen numerosas iniciativas médicas y científicas destinadas a no dejar a nadie atrás en esta batalla contra el virus. Las autoridades son responsables de brindar a los profesionales médicos toda la formación y las herramientas necesarias para enfrentarse a esta enfermedad, pero los sanitarios también deben establecer sinergias que les permitan estar actualizados en su desempeño diario.

A grayscale photograph of a person from the waist up, wearing a light-colored short-sleeved shirt. They are wearing metal handcuffs on both wrists, which are attached to a metal waistband. The person's hands are clasped in front of them. A large, white, bold number '6' is superimposed over the center of the image. To the left of the number, there is a solid orange vertical rectangle.

6

RESPUESTA DEL BID

La apuesta del BID para mejorar la gestión penitenciaria está encaminada a apoyar los esfuerzos que sustenten el propósito principal del sistema penitenciario: la rehabilitación y reinserción social de los individuos. El objetivo es prevenir y reducir el crimen y la violencia en la comunidad y mejorar la seguridad ciudadana. Los proyectos del BID en materia penitenciaria tienen una visión integral y holística de la rehabilitación y están centrados en ofrecer oportunidades que vayan más allá de la prisión. Para esto, es fundamental fortalecer la gestión penitenciaria y mejorar las condiciones de vida de los internos.

Ante los efectos de la pandemia del COVID-19, el BID está apalancando la cartera operativa en el sector de Seguridad Ciudadana y Justicia en varios países de ALC y lleva a cabo las acciones que se describen a continuación.

En el corto plazo:

Ofrecer una respuesta sanitaria urgente en las cárceles. En El Salvador y Ecuador, el BID está redireccionando algunos recursos para apoyar la producción y la compra de productos higiénicos para las cárceles como jabón, desinfectante líquido, máscaras y termómetros, entre otros.

Potenciar el uso de las tecnologías en las cárceles. El BID está redireccionando algunos recursos en el estado brasileño de Espírito Santo para implementar en las cárceles soluciones digitales de videollamadas con familiares, telemedicina, teleformación y audiencias virtuales. Esto permite que los presos conecten con el mundo exterior, además de controlar la circulación y el transporte no esencial de personas dentro y fuera de las prisiones.

De igual forma el BID, en alianza con empresas privadas, ha lanzado una solución de trámites en línea que incluye herramientas de identificación y firma digital. También está explorando la posibilidad de incluir algunos trámites claves para mantener los procesos judiciales y penitenciarios y que involucrarían a los juzgados, los internos y las familias.

Brindar soporte a las medidas alternativa a la prisión. En Uruguay, el BID reorienta recursos para disponer dispositivos electrónicos para el monitoreo de los ofensores en los casos de violencia contra la mujer, que es otra tragedia agravada por esta crisis.

En el mediano y largo plazo:

Fortalecimiento y mejora de la gestión penitenciaria. La gestión penitenciaria debe responder a una política criminal no punitiva, con un enfoque de derechos humanos y alineada con los estándares internacionales para garantizar la integridad de todas las personas privadas de libertad.

El BID ha identificado varias líneas de acción a mediano y largo plazo para fortalecer esa gestión y promover políticas y programas más efectivos: i) el desarrollo de sistemas de información encaminados a

reforzar la gestión penitenciaria basada en resultados, para medir y evaluar metas y objetivos, tanto individuales como institucionales; ii) la modernización de la infraestructura penitenciaria; iii) la promoción de penas alternativas al encarcelamiento y la privación de libertad en los centros penitenciarios; iv) la profesionalización de los funcionarios penitenciarios; v) la adopción de nuevas tecnologías para una mejor gestión penitenciaria; y vi) la definición de una gestión del presupuesto penitenciario basado en resultados.

Desarrollo de sistemas de información encaminados a fortalecer la gestión penitenciaria. El desarrollo de instrumentos de recopilación de datos tales como las encuestas y censos penitenciarios es un buen punto de partida para llenar los vacíos de información necesaria para elaborar diagnósticos detallados, analizar los problemas y diseñar soluciones específicas y de calidad. Por ejemplo, un estudio realizado por el BID a partir de encuestas realizadas a 14 países de ALC muestra que la población encarcelada es cada vez más joven, que el perfil de los internos varía de acuerdo con la edad y el género, y que las condiciones de vida en las prisiones estudiadas no cumplen con los estándares internacionales, lo que sin duda afecta la salud física y mental de los internos. Esto debe tomarse en cuenta para orientar la formulación de políticas penitenciarias de rehabilitación y reinserción social.

En el caso de El Salvador, además de contar con información confiable y actualizada del número total de privados de libertad a partir de estas encuestas, el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) da acceso a estadísticas básicas de la población reclusa como sexo, edad, situación jurídica, nivel educativo, años de condena, nacionalidad y domicilio. Esto posibilita que las autoridades establezcan necesidades y encaminen los esfuerzos para implementar un nuevo modelo de gestión penitenciaria basado en resultados.

Modernización de la infraestructura penitenciaria. La infraestructura carcelaria es un bien indispensable para que los sistemas penitenciarios cumplan su función rehabilitadora. Las instalaciones deben cumplir la normativa de derechos humanos en infraestructura penal, contar con estándares modernos de seguridad y facilitar la actividad recreativa y educativa en espacios comunes. Es preciso crear espacios y mecanismos que permitan satisfacer necesidades diferenciadas por género y edad.

La construcción y ampliación de los centros penitenciarios no puede ser la única solución a la congestión de las cárceles. Es importante calibrar las inversiones y replantearse cómo debe ser un establecimiento penitenciario para que cumpla su doble función social: ser lugar de cus-



20%

DE LOS RECLUSOS NO TIENE
ACCESO SUFICIENTE A
AGUA POTABLE



37%

CUENTA CON JABÓN



29%

DE ELLOS NO RECIBE
ATENCIÓN MÉDICA

todia y servir como espacio para la rehabilitación y la reinserción social. Operaciones desarrolladas en Panamá, Costa Rica y El Salvador, acompañadas por el BID, han apostado por crear infraestructuras penitenciarias alineadas con una visión rehabilitadora y dotadas con equipamiento que apoye ese fin.

La modernización de los sistemas penitenciarios incluye además la creación de protocolos que ayuden a mitigar las crisis de salud pública y promover la capacitación del personal penitenciario para aplicarlos.

Actualmente, el BID está diseñando un modelo de gestión integral penitenciaria para responder a las crisis de salud pública en las prisiones de ALC. También trabaja en una operación de préstamo en Ecuador que incluye la elaboración de protocolos y un fortalecimiento del sistema penitenciario para atender emergencias de salud pública.

Promoción de penas alternativas al encarcelamiento y la privación de libertad en centros penitenciarios. El nivel de hacinamiento de las cárceles es uno de los mayores problemas para la gestión penitenciaria y el BID apuesta por descongestionarlas más allá de la coyuntura del COVID-19. Propone, por un lado, impulsar y promover medidas alternativas al encarcelamiento; por ejemplo, multas, tribunales de tratamiento de drogas, programas de justicia restaurativa, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, libertad condicional, sentencia suspendida o arresto domiciliario. Por otro, enfocar esfuerzos técnicos y económicos en la promoción de herramientas tecnológicas que apoyen el seguimiento y control de las personas que cumplen sus penas en sus domicilios.

Profesionalización de los funcionarios penitenciarios. El personal penitenciario juega un rol decisivo en la calidad de vida de las prisiones, ya que es un actor clave en la manera en que las políticas penitenciarias son implementadas. El primer paso para la profesionalización del personal penitenciario debe ser la modernización de los planes de formación basados en el trato digno y la rehabilitación de los internos.

Adopción de nuevas tecnologías para una mejor gestión penitenciaria. El BID apoya e impulsa las innovaciones tecnológicas dentro del sistema penitenciario para agilizar los procesos judiciales y favorecer los programas de rehabilitación y reinserción de los presos. En este sentido, la tecnología permite mantener la comunicación con la familia durante el encierro y facilita el acceso a la capacitación y a las oportunidades laborales.

Definición de una gestión del presupuesto penitenciario basado en resultados. Los programas de rehabilitación y reinserción social deben estar basados en metodologías sólidas que cuenten con una planificación estratégica y con instrumentos que habiliten su monitoreo y permanente evaluación. Resulta vital documentar las lecciones aprendidas y medir su eficiencia y eficacia para promover la aplicación de las buenas prácticas y garantizar la continuidad de las políticas exitosas.

En un contexto de restricciones presupuestarias, de personal y de infraestructura, por la limitada oferta y baja cobertura de servicios de intervención y la poca o nula disponibilidad de datos de calidad para monitoreo y evaluación, se podría definir un plan de acción que sienta las bases para la modernización de la oferta de programas de intervención penitenciaria e incluya: i) la creación de un nuevo instrumento de valoración del riesgo de reincidencia diseñado específicamente para la población carcelaria, que facilite el egreso progresivo de los privados de libertad y descongestione el sistema sin afectar la seguridad ciudadana; ii) un esquema para el uso efectivo de los recursos remanentes generados por el ahorro de gastos de operación orientado a facilitar la transición cárcel-comunidad; y iii) una transición gradual de la inversión hacia programas de tratamiento en la comunidad y una reducción del flujo de ingreso de casos a cárceles de manera sostenible en el tiempo.

El coronavirus es un desafío para la sociedad que requiere dosis importantes de solidaridad y trabajo conjunto. Sin duda, la positiva respuesta de los países y entidades amigas al Diálogo Regional Virtual sobre el Sistema Penitenciario demuestra el valor de este tipo de encuentros y reafirma el compromiso de todos para salvar vidas y proteger a los más vulnerables. Promover estos diálogos permite reflexionar en conjunto y compartir los miedos, desafíos, logros y, sobre todo, incita a establecer esquemas más efectivos de cooperación.

El BID apoya a los países para dar respuesta a la crisis y trabaja para contribuir a transformar los problemas estructurales de las cárceles ahora agudizados por la pandemia. Las crisis son oportunidades y, si se consigue ser intencional con el problema, las medidas que ayuden a atender los desafíos del sistema penitenciario en el corto plazo serán, con suerte, las mismas que ayuden a fortalecerlo y convertirlo en lo que siempre tuvo que ser: una estación de paso para reconstruir vidas truncadas por la pobreza y el crimen.

